

NICARAGUA

LAS ELECCIONES 2011



Introducción

Patricia Zapata Alamilla  3

6 de noviembre: Elecciones en Nicaragua

Saúl Obregón Gutiérrez  6

**Elecciones 2011 en Nicaragua:
"En río revuelto ganancia de pescadores"**

Luis A. Caldera  9

Las elecciones en Nicaragua

Carlos Fonseca Terán  14

**El engañoso encanto
de las elecciones Nicaragüenses**

Mónica Baltodano  17

INTRODUCCIÓN

PATRICIA ZAPATA ALAMILLA ¹

La Oficina Regional en México de la Rosa Luxemburg Stiftung tiene el gusto de presentar a ustedes la segunda entrega de análisis político que tiene como objetivo dar un panorama sobre la posición de izquierda frente a las coyunturas electorales que viven los países en los que trabajamos.

Nuestra oficina regional atiende el trabajo de la Rosa Luxemburg Stiftung en México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Cuba y luego de las elecciones en Guatemala sucedidas en septiembre de este año, ahora asistimos a los comicios en Nicaragua que se realizarán el próximo 6 de noviembre.

Creemos que es fundamental dar a conocer entre los diversos actores políticos, organizaciones sociales y diversos públicos de los dos continentes que nos unen, cual es la postura frente a estos procesos de las izquierdas en los países.

La realidad política de la Nicaragua de hoy y la situación de la izquierda en el país tiene que ser analizada teniendo en cuenta el contexto histórico que nos lleva a la actualidad y es precisamente el análisis de esto en ojos de diversos actores de la izquierda ahora en diferentes trincheras lo que nos lleva a presentarles este material.

Antes de dar voz a los sujetos de esta historia nos permitimos esta breve introducción que pretendemos logré situar a los lectores que ven la realidad desde lejos o que tienen poca información al respecto.

El próximo 6 de noviembre se realizarán elecciones generales en Nicaragua en medio de un clima de alta polarización entre las fuerzas que contienden representadas por un lado por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el otro lado por la derecha dividida entre el Partido Liberal Independiente (PLI) que promueve la candidatura de Fabio Gadea y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que postula al expresidente Arnoldo Alemán a quien la Corte Suprema de Justicia habilitó como candidato pese a haber sido procesado por hechos de corrupción en el pasado.

A estas elecciones se llega después de que el FSLN ganara las urnas en 2006 por un margen suficiente que le permitió evitar la segunda vuelta, comicios en los que la participación del partido Movimiento de Renovación Sandinista (MRS) y del Movimiento por el Rescate perfilaban una oportunidad para replantear la izquierda en el país que hasta el momento ha fracasado.

¹ Patricia Zapata Alamilla es la Coordinadora de Proyectos para Centroamérica y Cuba de la Oficina Regional en México de la Fundación Rosa Luxemburg.

En las elecciones municipales que se realizaron en 2008, el país se enfrentó a serios conatos de violencia que evidenciaron que se mantenía la polarización en el país y el FSLN fue acusado de diversos tipos de fraude y de la utilización de los recursos del Estado para su beneficio.

Para empezar a poner las cosas en su justo contexto es necesario recordar que el hoy gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) emana de un movimiento de izquierda y revolucionario que se insubordinó ante la dictadura de la familia Somoza y que surge como una fuerza de corte marxista guiada por el pensamiento de Augusto C. Sandino.

Es necesario recordar que el FSLN fue la vanguardia de la Revolución Popular Sandinista que triunfó el 19 de julio de 1979 y que guiado por el pensamiento de Sandino y de su fundador Carlos Fonseca Amador, tuvo grandes logros que hay que reconocer entre los que se encuentra el hecho de haber aniquilado los aparatos militares y policiales del régimen somocista y haber llevado a cabo grandes y radicales transformaciones económicas y políticas como el hecho de haber democratizado la propiedad rural y haber entregado a los nicaragüenses la mitad de la tierra cultivable del país.

Sin embargo a pesar de estos logros, la transformación agraria no logró transformar la conciencia del campesinado y la población rural que mantuvo las estructuras del pasado y además el modelo que en ese entonces planteaba el FSLN tuvo pocas oportunidades de ser implementado a cabalidad ya que se enfrentó a una guerra impulsada por la llamada contra que con el apoyo total de Estados Unidos desgastó al gobierno sandinista en un conflicto interno permanente. Las otrora fuerzas revolucionarias además fueron incapaces de mantener el poder lo que condujo al revés político de 1990, cuando Daniel Ortega, primer presidente revolucionario tuvo que entregar el poder a la derecha representada por Violeta Chamorro.

Así nos encontramos en la década de los 80 y para entender el fracaso de las fuerzas revolucionarias en las segundas comicios a los que se presentaron es necesario partir de esa realidad que reconoce los indiscutibles logros de la revolución, pero también reconoce que el proyecto revolucionario fue un proyecto que no pudo implementarse por la enorme cantidad de recursos económicos, materiales y sobre todo humanos ya que una enorme cantidad de jóvenes defendieron la revolución con su vida al cumplir con lo que se llamaba Servicio Militar Patriótico para enfrentar la guerra de baja intensidad que fundamentalmente desde Honduras grupos contrarios a la revolución financiados y alentados por los Estados Unidos impidió la total implementación del modelo y sobre todo el establecimiento de la paz en Nicaragua.

La derrota sufrida por el FSLN en las urnas en 1990 puede explicarse por dos razones fundamentales, por un lado la grave situación económica en la que estaba el país que fue acosado y desgastado económicamente y por otro por el sufrimiento de la población frente

a la guerra que se enfrentaba día a día y que estaba acabando con la vida de muchísimos jóvenes nicaragüenses.

Con el triunfo de una fuerza de corte neoliberal encabezada por Violeta Chamorro se pretendió la consolidación del sistema capitalista y dio inicio un período de retrocesos, desmontajes y desarticulación de las transformaciones hechas en los años 80. Aquí también es necesario reconocer el papel que jugó en el imaginario colectivo nicaragüense la llamada piñata sandinista, donde una élite de los revolucionarios en el poder hicieron una auténtica piñata en la que se repartieron los bienes que según sus propios principios eran propiedad colectiva del pueblo.

Lo sucedido entonces demuestra que el hecho de que fuerzas de izquierda logren llegar al poder sea por la vía de las armas o por vía electoral no es suficiente para garantizar la realización de transformación que se necesitan para implementar el modelo que se enarbola.

El gobierno excluyente de Violeta Chamorro fue seguido de un gobierno corrupto encabezado por Arnoldo Alemán, para diciembre de 1999, cuando la pobreza estaba afectando a cerca del 86% de la población, se realiza una sesión plenaria en la Asamblea Nacional que aprobó las reformas Constitucionales que daban sustento a lo que se conoce como el pacto Alemán-Ortega. Y ese es quizás el momento definitivo en la historia de Nicaragua porque evidencia de forma clara que la izquierda había cedido en sus planteamientos de lucha por la democracia política y económica, por la soberanía y la independencia en aras de garantizar espacios de poder.

El viraje político de Daniel Ortega viene observándose desde 1998 cuando respalda a la corriente más de derecha del FSLN constituida en el Bloque de Empresarios Sandinistas, muchos de ellos enriquecidos a partir de la llamada piñata sandinista y esto lleva primero a la marginación de los principales dirigentes de la corriente izquierda democrática y posteriormente a la congelación de la lucha popular y la lucha ideológica lo que dio como resultado la priorización de la lucha electoral.

El 5 de noviembre de 2006 Daniel Ortega gana nuevamente las elecciones impulsado por FSLN que sin duda no era el mismo que lo llevó al poder en 1983. La transformación de este partido no se dio de la noche a la mañana, fue más bien un proceso largo y continuo cuya tendencia más persistente fue la Izquierda Democrática que en octubre de 1993 reclamaba el fin de la política de co-gobierno con la administración de Chamorro, a partir de ahí se disputaron la conducción del Frente y luchando desde el interior para mantener el carácter popular, ideológicamente identificado con las propuestas revolucionarias. En el Congreso del partido de 1998 la corriente de Izquierda Democrática decidió no postularse para cargos internos en la Dirección Nacional y buscaron cargos internos en la conducción departamental de Managua pero todos los caminos internos les fueron cerrados hasta relegarlos de todos los cargos partidarios.

Sin embargo las fuerzas de la izquierda que desde el interior se

han opuesto a las posiciones de Daniel Ortega fueron excluidas e incluso perseguidas y criminalizadas y en el escenario electoral que se avecina se encuentran prácticamente fuera de la contienda electoral. Tal es el caso tanto del Partido por la Renovación Sandinista, cuyo registro fue cancelado como de la corriente Movimiento por el Rescate.

Ortega se presenta a las elecciones de este 2011 en una situación por lo menos polémica ya que fueron necesarios una serie de cambios y maniobras política para permitir su candidatura que tenía impedimentos constitucionales, sin embargo todas las encuestas revelan que cuenta con la mayoría necesaria para ser por tercera vez presidente del país.

Es necesario mencionar que una parte de esta intención de voto está definida por los programas sociales que ha implementado con los fondos del ALBA (provenientes de la iniciativa de integración regional que promueve el gobierno venezolano de Hugo Chávez) y que le permiten el manejo discrecional de grandes cantidades de dinero que han sido repartidos para contener la pobreza y que aunque se reflejan en la bolsa de la población de manera cotidiana, no constituyen una alternativa que cambie el modelo económico excluyente que se vive en el país.

Es poco probable que el FSLN de Daniel Ortega pierda las elecciones que se realizarán el 6 de noviembre, pero también es poco probable que la izquierda nicaragüense se sienta representada en este régimen y que un segundo mandato consecutivo de Ortega pueda transformar una realidad de pobreza, marginación y exclusión que vive Nicaragua a partir del establecimiento de un modelo económico neoliberal y que no ha sido modificado hasta el momento.

Para hablar de todo esto de forma más profunda presentamos a ustedes cuatro artículos que posicionan a diversas fuerzas de la izquierda que conviven en Nicaragua hoy. Contamos en esta publicación con el aporte de dos organizaciones contrapartes de la RLS en el país Centroamericano, Saúl Obregón de la Fundación del Río que trabaja en la zona de Río San Juan y de Luis Caldera de Desarrollo Municipal. También contamos con el análisis de Mónica Baltodano dirigente histórica del FSLN que hoy se encuentra al margen de esta fuerza política y abandera la lucha del Movimiento por el Rescate Sandinista.

El otro texto que integra este material fue realizado por Carlos Fonseca Terán, Secretario Adjunto de Relaciones Internacionales del FSLN. Agradecemos a cada uno de los autores el tiempo y disposición que manifestaron para llevar a cabo esta propuesta que pretendemos fije la posición de diversas fuerzas frente a la coyuntura electoral que vive Nicaragua.

6 DE NOVIEMBRE:

EL ELEGIR EN NICARAGUA

SAÚL OBREGÓN GUTIÉRREZ ²

Bajo un estado de calamidad, decretado debido a los cuantiosos daños ocasionados en todo el país por fuertes y constantes lluvias, Nicaragua se encamina a las elecciones nacionales. El 6 de noviembre las y los pinoleros elegiremos nuevas autoridades en los cargos de presidente, vicepresidente y diputados para Asamblea Nacional y Parlamento Centroamericano.

Cinco agrupaciones políticas, con sus respectivas alianzas, son las inscritas para esta pugna electoral: Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Partido Liberal Independiente (PLI), Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y Acción por la República (APRE).

El ambiente de esta campaña ha estado marcado por la demostración del músculo de los partidos mayoritarios, con el desarrollo de movilizaciones masivas de simpatizantes y derroche de propaganda. El FSLN destaca poniendo a disposición de la campaña recursos humanos y medios de movilización del aparato estatal y las alcaldías en su poder. De igual manera, las alcaldías liberales utilizan sus medios y recursos económicos para apoyar a sus partidos y candidatos.

Por otro lado, se aprecia un clima de desconfianza por la transparencia en los resultados que surjan de las votaciones. El árbitro de estas elecciones, el Consejo Supremo Electoral (CSE) y todos sus integrantes han sido cuestionados fuertemente por estar a disposición del denominado pacto realizado entre el partido de gobierno y el Partido Liberal Constitucionalista. La figura más desprestigiada de este poder del Estado su presidente, Roberto Rivas, antiguo cuadro del PLC y hoy aliado del FSLN también ha sido cuestionada por actos de corrupción y por amasar una fortuna de dudosa procedencia. El denominado fraude electoral en las elecciones municipales del 2008, donde el FSLN obtuvo la mayoría de las alcaldías que posee el país, es el principal demonio que acompaña al CSE. El retraso en la acreditación de la observación electoral nacional e internacional, la entrega a discreción de las cédulas de identidad documento imprescindible para ejercer el derecho al voto, la verificación del padrón electoral limitada a un solo día y la decisión a última hora de cambiar las cuatro boletas para ejercer el voto por una sola, son parte de las acciones que refuerzan los cuestionamientos a la imparcialidad del CSE y la igualdad de oportunidades para todos los partidos políticos.

² Miembro de la Fundación del Río

La actual coyuntura política trastoca todos los sectores y niveles de la población nicaragüense. La división y poca tolerancia entre los miembros de uno u otro partido se profundizan. A pesar de ello se mantiene una relativa calma en el país. El fantasma de la guerra, un argumento utilizado en contra del FSLN en todas las contiendas electorales, vuelve a surgir, aludiendo, en esta ocasión, a que si Fabio Gadea (PLI) pierde las elecciones será porque le robaron y esto provocará que se rearme la población. Este argumento encuentra eco en las zonas rurales del país, donde los niveles de educación son mínimos y el conflicto armado de los años ochenta dejó una población dispuesta a votar por la propuesta más antisandinista que se presente.

El Frente Sandinista, este 6 de noviembre, no sólo aspira a ganar las elecciones sino a tener mayoría parlamentaria que le permita modificar la Constitución y realizar, según sus dirigentes, las transformaciones sociales que requiere el país. Esto los ha forzado a realizar acciones que, en muchos casos, son contraproducentes. Asimismo, la insistencia en mantener la candidatura presidencial de Daniel Ortega prohibida por la Constitución Política del país pero amparada en una resolución de la Corte Suprema de Justicia ha provocado mayores anticuerpos a sectores de la población que, según afirman, observan el nacimiento de una nueva dictadura en el país.

El partido de gobierno, FSLN, llegó al poder por primera vez en 1979 encabezando una revolución en contra de la dictadura somocista. Durante los diez años que se mantuvo en el gobierno realizó importantes cambios en la dinámica del país pero perdió las elecciones de 1990 debido, en gran medida, al desgaste sufrido por una guerra impuesta organizada y financiada por Estados Unidos.

Transcurrieron diecisiete años para que el FSLN alcanzara nuevamente la silla presidencial con la figura de Daniel Ortega al frente. Esta victoria del FSLN en una sociedad mayoritariamente antisandinista se explica gracias a la fuerte división de los partidos liberales y las reformas a la ley electoral realizadas entre 1997 y 2001 en el marco de los acuerdos del FSLN y el PLC en ese entonces en el gobierno, lo que se conoce como el pacto. A través de estas reformas se modificó, entre otras cosas, el porcentaje necesario para ganar las elecciones, pasando del 45% al 35% que actualmente rige. Hay que recordar que el FSLN ganó las elecciones en 2007, con el 38% de los votos.

Durante este nuevo periodo presidencial, el FSLN ha realizado en relación a los anteriores gobiernos neoliberales que le precedieron importantes cambios en las prioridades y enfoques del Gobierno, desplegando una serie de políticas y proyectos que traen beneficios a la población más desprotegida. Hambre Cero, Usura Cero, Plan Techo, Casas para el Pueblo, subsidio al transporte y energía, aumento a los salarios de trabajadores públicos a través del bono solidario, microcréditos a mujeres y productores, campañas de alfabetización y puestos de alimentos a precios subsidiados son parte

de los principales ejes de acción que se han impulsado en todo el país y que, con la cercanía de las elecciones, se han multiplicado y ampliado. Asimismo, el FSLN ha garantizado que Nicaragua se sumaría a la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) lo que representa un bloque alternativo a las políticas imperialistas y hegemónicas de Estados Unidos que habían sido acatadas por los tres gobiernos anteriores en Nicaragua. En ALBA, y específicamente con el apoyo económico de Venezuela, Nicaragua también ha encontrado los recursos necesarios para implementar los programas sociales y hacerle frente a la crisis económica global y a la salida del país de los fondos de cooperación externa.

El departamento de Río San Juan, en el sureste de Nicaragua, ha sido una de las zonas del país que se ha visto favorecida con las políticas del Gobierno, dejando atrás parte del abandono institucional y olvido nacional al que nos tenían acostumbrados los gobiernos neoliberales. Se ha observado un retroceso en las políticas privatizadoras de la educación y la salud, y un mayor énfasis en el agro y la voluntad política para la conservación de los recursos naturales.

Lamentablemente, el abordaje del Frente Sandinista a través de los programas sociales parte de un enfoque clientelista y electorero, sin apuntar a un cambio estructural del país. El Gobierno se ha mantenido firme en los acuerdos con los organismos de dominación capitalista Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), se ha vuelto aliado de la cúpula empresarial y no ha tocado los intereses de la gente más rica del país, ha incorporado hasta la saciedad la religiosidad en sus actos, llegando en muchos casos a competir con las iglesias principalmente, la católica por quienes están más cerca de Dios, demostrando su amor a la vida con la penalización del aborto terapéutico y el apoyo económico a las iglesias.

Su posicionamiento durante los cinco años de gobierno convierte el proyecto cristiano, socialista y solidario del FSLN en una propuesta contradictoria, de ideas y acciones revueltas que difícilmente podrían entenderse sin conocer el contexto de dependencia económica y pobreza ideológica en que Nicaragua está sometida; y sin conocer la decisión tomada por el FSLN a inicios de los años noventa de renunciar a las luchas de movimientos sociales y participar en el juego de la democracia partidista para alcanzar y mantenerse en el poder. Según datos de la última encuesta de Cid Gallup (septiembre 2011), el FSLN sustenta un 45.8% en la intención de votos.

Al otro lado de la acera se encuentran los cuatro partidos de derecha que se disputan por ser los más antisandinistas de la contienda electoral. Estas agrupaciones, en muchos casos por protagonismo o intereses personales de sus dirigentes, no han logrado ponerse de acuerdo para constituir un solo bloque y van en casillas diferentes. El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) fue el partido más fuerte durante la época de los noventa y se mantuvo en el gobierno por dos periodos consecutivos (1996-2006). Su máximo líder, el ex presidente, ex reo y actual candidato presidencial, Arnoldo

Alemán carga una figura desgastada y desprestigiada por los actos de corrupción durante su periodo presidencial, pero principalmente por los acuerdos con el FSLN enmarcados por el conocido pacto que lo ha colocado en las bases liberales como aliado del Frente, su afán por ocupar nuevamente la presidencia ha motivado la salida de cuadros de sus filas que hoy encabezan las otras agrupaciones políticas liberales. Actualmente, el PLC se está posicionado como la tercera fuerza del país con un 10.1% de intención de votos.

Fabio Gadea Mantilla, integrante hasta hace poco de las filas del PLC, es un personaje apreciado en las bases antisandinistas por sus años de trabajo al frente de Radio Corporación. Actualmente, el viejo, como es conocido Fabio en las bases liberales, se encuentra al frente de la alianza que lidera el Partido Liberal Independiente (PLI). Su principal aliado es el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) al que pertenece su fórmula de vicepresidente Edmundo Jarquín. Esta alianza ha tomado fuerza y actualmente está posicionada, según la tendencia mostrada en las encuestas, como la segunda fuerza política 33.5% según Cid Gallup para las elecciones de noviembre. Los miembros de esta alianza, integrada por diversos sectores de la sociedad, comparten principalmente su afán por impedir la reelección de Daniel Ortega y el FSLN pero no han logrado difundir una propuesta atractiva con relación al desarrollo del país. Su campaña gira alrededor de la evasión de la dictadura de Ortega y la continuidad del pacto con Alemán.

El fortalecimiento del PLI en las bases antisandinistas incorpora nuevos matices a esta contienda electoral. Tanto así que dicha situación ha motivado la destitución de algunos alcaldes que habían llegado a la municipalidad cobijados con la bandera del PLC, pero que decidieron respaldar la candidatura de Fabio. Además, a través de la influencia que tiene el PLC en el Consejo Supremo Electoral, se ha llevado a cabo la destitución de candidatos a diputados del PLI que provenían del PLC. Sin embargo, estas medidas han promovido en muchas de las bases liberales un mayor respaldo a la propuesta de Fabio ya que, según sus seguidores, es una muestra más del pacto existente entre el FSLN y el PLC. Los otros dos partidos liberales que compiten en estas elecciones, el APRE y el ALN, casi no aparecen en la intención de votos de la población nicaragüense, y en Río San Juan sus propuestas son desconocidas.

El 6 de noviembre, esperando que la madre naturaleza nos dé una tregua para ejercer el derecho universal al voto, los nicaragüenses y las nicaragüenses decidiremos qué rumbo seguirá el país. Esperamos que esta decisión sea sin miedo y conscientes que la democracia partidaria es limitada y no está a la altura de las demandas de los sectores populares. Recordando también que la lucha no debe ser por adaptarnos al sistema global imperante, sino por transformarlo.

ELECCIONES 2011 EN NICARAGUA:

“EN RÍO REVUELTO GANAN LOS CAJADORES” DE PESCADORES³

LUIS A. CALDERA ³

El próximo 6 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones nacionales en Nicaragua. No habría motivos para hacer estas notas —al menos para quien las escribe— si no tuviéramos en la mente el impacto que estas elecciones tendrán en la estabilidad política, el desarrollo económico y la armonía social del país. En esa fecha concluirá un proceso electoral cargado de bastantes irregularidades jurídicas, saturado de procedimientos turbios y, lo más delicado, deslegitimado por gran parte de la opinión pública nacional.

Las irregularidades jurídicas parten de dos hechos fundamentales: Un Consejo Supremo Electoral (cse) “de facto” y la candidatura ilegal de Daniel Ortega.

En el cse hay magistrados para los que el mandato, por razones de temporalidad, ha expirado. Por su parte, a causa de una conveniencia política, el Poder Ejecutivo ha abusado de sus competencias y, tras una interpretación antojadiza de la Constitución, avaló la permanencia de los magistrados electorales en sus cargos, pasando, además, por encima del principio constitucional —universal— de la separación de poderes.

Otra carencia del Consejo Supremo Electoral que encabeza Roberto Rivas, un aliado del Cardenal Obando y Bravo señalado de varios casos de corrupción, es que los magistrados no tienen facultades legales para mantenerse en sus cargos. A los magistrados se les venció su período hace varios meses, y se mantienen en sus cargos en virtud de un decreto presidencial emitido en enero 2009 que les prorrogó su mandato sin tener facultades para hacerlo. Sin embargo, la Asamblea Nacional no ha podido elegir a los nuevos magistrados, ni pudo reunir los votos para derogar el decreto de Ortega. Vamos a elecciones, entonces, con un Consejo Electoral de facto, denunciado por fraude, controlado por el partido de gobierno, que incluso ha prohibido la observación electoral. Pero, a final de cuentas, la participación de los partidos, aunque sea bajo protesta, legitima el proceso electoral. (Carlos Fernando Chamorro en <http://www.confidencial.com.ni/downloads/103.pdf>. Fecha de consulta: 17 de octubre 2011).

La candidatura de Daniel Ortega es ilegal puesto que violenta el artículo 147 de la Constitución de la

³ Presidente de la Asociación para el Desarrollo Municipal (ADM)

República, que expresamente prohíbe la reelección continua y la nominación de aquel ciudadano o aquella ciudadana que haya ejercido la presidencia en dos ocasiones. Mediante otra interpretación de la Constitución dirigida a su conveniencia y abusando de sus competencias, la Corte Suprema de Justicia “legalizó” la candidatura de Ortega.

A lo largo de los últimos años se han documentado todos los cuestionamientos jurídicos a este procedimiento ilegal, que pone en entredicho la credibilidad del proceso electoral, y la legitimidad de una eventual presidencia de Ortega. Los juristas más connotados del país, incluidos ex presidentes de la Corte Suprema, de la Asamblea Nacional, del Consejo Supremo Electoral; los partidos de oposición, los medios de comunicación, la sociedad civil, la Iglesia, han protestado y cuestionado hasta la saciedad este procedimiento, y se preparan para recurrir ante instancias internacionales. Pero el hecho político fundamental es que las protestas de la oposición y la sociedad civil, no han sido capaces de generar una crisis política en el parlamento o en las calles, mientras que el gobierno mantiene una movilización permanente de su maquinaria política en respaldo a su proyecto reeleccionista. En consecuencia, la candidatura a la reelección de Ortega se ha impuesto las vías de hecho, amparada en una dudosa legalidad, con la bendición de instituciones controladas por el partido de gobierno. Pero su única “legitimidad” se deriva del hecho de que los partidos que aspiran a liderar a la oposición, reconocen esa candidatura como un hecho consumado y no están dispuestos a correr el riesgo de abstraerse de la competencia electoral. (Carlos Fernando Chamorro en <http://www.confidencial.com.ni/downloads/103.pdf>).

Fecha de consulta: 17 de octubre 2011).

Asimismo, dos elementos son suficientes para demostrar la poca transparencia en los procedimientos que son sustantivos en el proceso electoral: irregularidades en el proceso de cedulaación y la suspensión de la observación electoral.

Como se sabe, la Cédula de Identidad Ciudadana es el único documento válido para que todo ciudadano o ciudadana pueda ejercer su derecho a elegir. Decenas de personas han expresado sus quejas e inconformidades por las justificaciones que recibieron del Consejo Electoral para evitar entregarles su cédula de identidad; sin embargo, otros miles la han recibido y según opinan muchos ofendidos, eso ha sucedido por razones de afinidad política. Aparentemente, ciertas medidas de favoritismo político se han impuesto en la entrega de cédulas de identidad por lo que las protestas ciudadanas han saltado a las calles.

El Instituto para la Democracia —Ipade— continúa monitoreando el quehacer electoral en los 153 municipios del país, en 80 de los cuales detectó que a 713 personas se les había entregado su cédula de identidad en su domicilio; cuando se le preguntó quién se las había entregado, el 61.6% dijo que el FSLN; el 30.4% contestó que el Consejo Supremo Electoral, CSE; un 5.4% mencionó “otras” personas que se las habían entregado y el 2.6% no especificó quién o quiénes les llegó a dejar el documento de identificación ciudadana hasta su vivienda. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, se ha convertido en el “gran cedulador”, a nivel nacional pues, según el Tercer Informe Electoral emitido por el Instituto para el Desarrollo y la Democracia, Ipade, un 61% de una muestra de ciudadanos de 80 municipios, indicaron que sus cédulas les fueron entregadas en su casa de habitación por representantes del partido de gobierno.

Por otra parte, según el informe, a nivel nacional existe un universo de 102,756 documentos supletorios de votación que aún no se han entregado y unas 400,000 cédulas en proceso de entrega. (El Nuevo Diario en http://www.elnuevodiario.com.ni/politica/230071_ipade-confirma-cedulaci%C3%B3n-partidaria). Fecha de consulta: 15 de octubre 2011)

Un segundo procedimiento que pone “sombras” y cultiva sospechas está vinculado al derecho ciudadano de observar la marcha del proceso electoral. Contraviniendo a la Constitución Política y a la Ley Electoral, el CSE aprobó recientemente un mecanismo denominado “Acompañamiento electoral” mismo que pone límites a la ciudadanía para ser testigo de la calidad de todo el proceso electoral y sobre todo el día de los comicios.

El nuevo reglamento de observación, que el Consejo Supremo Electoral (CSE) insiste en llamar “Reglamento de acompañamiento” y que fue emitido el 16 de agosto, no es más que el instrumento para bloquear la capacidad de organizaciones nacionales e internacionales que quieran registrar los



acontecimientos del proceso. (Confidencial en <http://www.confidencial.com.ni/articulo/4666/cse-borra-prerrogativas-de-observadores-y-limita-ver-lo-que-ellos-manden>).
Fecha de consulta: 17 de agosto 2011).

Aunado a esto, diversas instituciones nacionales especializadas en la observación electoral no han sido autorizadas para ejercer esta modalidad de observación electoral recién aprobada. Por conveniencia política, algunos observadores internacionales han sido acreditados (Unión Europea, oea), pero otros no (Centro Carter).

El reglamento de observación electoral —que existía desde 1990 y bajo el cual miles de ciudadanos y ciudadanas, además de diversos organismos internacionales de observación, constataron los niveles de veracidad y pureza de los procesos electorales ocurridos en los últimos veintiún años— ha quedado enterrado de forma arbitraria, ofensiva e irresponsable.

Según diversas encuestas, la gran mayoría de los y las nicaragüenses consideran importante la observación electoral e internacional en los próximos comicios electorales, ya que 64,6% la valora de “muy importante” y 24,5% de “importante”.

Con estos y otros hechos no menos relevantes, una buena parte de la ciudadanía desconfía del Consejo Electoral y en consecuencia, la ancha brecha existente entre las aspiraciones ciudadanas y el ejercicio del poder se ha extendido, al punto de que el comportamiento del electorado se ha comenzado a mover entre la continuidad de un orden autocrático, populista y corrupto o, simple y sencillamente, la superación de esto.

En cualquier espacio de la sociedad se comenta de manera conclusiva que el “diseño técnico” del proceso electoral está preparado para que Ortega gane las elecciones. Las encuestas de opinión también le asignan porcentajes importantes, suficientes como para ganar en primera vuelta. Sin embargo, los imponderables políticos están presentes en la memoria histórica de Nicaragua (1990).

El Frente Sandinista prácticamente tiene garantizado el control de las más de 12 mil Juntas Receptoras de Voto (jrv) que estarán habilitadas en todo el país para las elecciones del 6 de noviembre, ya que la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) no pudo presentar las ternas suficientes para ocupar los cargos de los primeros miembros en una buena parte de las jrv a nivel nacional, dado que esta organización política no cuenta con el tendido electoral necesario, por lo que el FSLN podría ocupar los puestos vacantes (Confidencial en <http://www.confidencial.com.ni/articulo/4959/cse-otorga-control-de-12-000-mesas-de-votacion-al-fsln>).

Fecha de consulta: 25 de septiembre 2011)

Por un lado, considerando las prácticas populistas del partido

gobernante resulta fácil concluir que el agradecimiento o el signo esperanzador de ser “beneficiado” en el futuro —con algún documento legal sobre la propiedad que se habita desde hace varios años, alguna lámina de zinc, algunas gallinas, algún préstamo o alguna oportunidad laboral, entre otras— terminará influyendo en miles y así la votación masiva será favorable para Ortega, pese a que es un candidato ilegal. De otro lado, debido a todo el descontento, las frustraciones, insatisfacciones y temores, la votación masiva probablemente no será a favor de Ortega. Sin embargo, en opinión de muchos analistas, para ambos escenarios se ha preparado “la parte técnica” construida por el partido de gobierno.

Durante la entrega de 4,794 títulos de propiedad en Managua, el mandatario nicaragüense anunció que Obando realizará un recorrido, que concluirá 10 días antes de celebrarse los comicios, entregando esos títulos de propiedad.

Ortega anunció que el religioso entregará entre el 23 de septiembre y el 27 de octubre un total de 43,649 títulos de propiedad.

Ortega nombró a inicios de su mandato, en enero de 2007, a Obando como presidente de la Comisión de Verificación, Paz y Justicia y desde entonces ha entregado láminas de zinc y títulos de propiedad en todo el país.

No obstante, gane quien gane, en medio de este desorden creado deliberadamente y que promete incrementarse el propio día de las elecciones, al menos hay cuatro preguntas claves sobre lo que diversos sectores organizados de la sociedad están reflexionando:

- ¿Qué reconocimientos de legalidad tendrá el gobierno que resulte si surge de un proceso electoral cargado de irregularidades jurídicas, y arbitrado por una autoridad constituida con abundantes rasgos de ilegalidad?
- ¿Qué posición tomará el partido de gobierno y sus partidarios si el Consejo Electoral informa de resultados que no le favorecen, o simplemente, concluye que debe pasar a una segunda vuelta?
- ¿Qué posición tomarán los partidos (y sus votantes) a quienes el Consejo Electoral les acredite una cantidad de votos que no coinciden con los esperados según el informe de sus fiscales (tal como sucedió en 2008)?
- En cualquiera de esas condiciones, ¿qué posición y qué acciones determinarán tomar los diferentes sectores organizados de la sociedad?

Si durante el día de los comicios se producen —en la parte técnica electoral— excesos de abusos y trampas en todos los niveles y campos del sistema, tan recurrentes, amplios, delicados y graves que sea imposible ocultarlos ante la opinión pública, como ocurrió en el 2008, con seguridad el país entrará en una dinámica de violencia dramáticamente peligrosa.

La mayoría de los nicaragüenses, seis de cada diez, tiene la

percepción de que las próximas elecciones generales, a celebrarse en 2011, no se llevarán a cabo de forma transparente y limpia, ya que podrían registrarse irregularidades y hasta fraude, indican resultados de una encuesta del Centro de Investigación y Asesoría Socio-Económica (cinase). (Confidencial en <<http://www.confidencial.com.ni/articulo/599/mas-del-60-perciben-que-elecciones-del-2011-no-seran-limpias>>. Fecha de consulta: 17 de octubre 2011)

De ocurrir dichos abusos técnicos y de conocerse la trascendencia que tengan en los resultados electorales, el 6 de noviembre podría ser el momento en que la “olla” que ha estado tapada y soportando fuego por mucho rato, estalle, y muy probablemente, al margen de los comportamientos que tengan los líderes de los partidos políticos.

Previendo esta situación engendrada, el perfil del discurso electorero de Ortega ha estado saturado de citas religiosas y supuestos poemas que siembran “paz, amor y vida”.

Esta es la Campaña del bien común. De las Realizaciones desde el bien común. La Campaña de la multiplicación de los panes, donde Dios obra milagros, para que el bien se establezca... Estaremos “donde el Sol caliente”, sin palabras ofensivas para nadie, porque para nadie es ajena o desconocida la obra del Señor en Nicaragua, a través de este Gobierno y de los servidores sandinistas... Dios nos ha permitido hacer un buen gobierno. Esa es nuestra principal fortaleza. Todos lo saben. Todos lo dicen. (*Fragmentos de “Campaña del bien común”, elecciones 2011—FSLN*)

No obstante, como es propio de Ortega, también se sabe que existen planes del partido de gobierno que pondrán en práctica el 6 de noviembre: acciones para presionar a fiscales, y que tienen como objetivo básicamente alterar el orden en los centros de votación para obligar a cerrar —antes del horario establecido por la Ley— las Juntas donde haya votantes “no danielistas”; acciones de provocación a líderes políticos para finalmente responsabilizarlos de la agitación que pueda producirse en el país; represión sobre actores de la sociedad civil organizada para intentar neutralizar y ahogar posibles reacciones masivas de ciudadanos y ciudadanas descontentas, cabe mencionar que la represión política directa contra el liderazgo de la sociedad civil se ha empezado a producir en el mes de octubre.

Es un hecho, para muchos, que el 6 de noviembre se abre una página en la historia de Nicaragua. No necesariamente porque se vaya a producir un resultado electoral inesperado, sino porque todo indica que la ciudadanía se verá obligada a reaccionar de una forma activa y digna, ante tanta burla, tanta mentira y tanto discurso cargado de ofertas que terminan siendo favorables a los negocios propios y finalmente son estafas; ante tantas amenazas y chantajes desplegados por actores ligados al partido de gobierno

en cada espacio de vida de las personas (en el trabajo, la escuela, la universidad; en la actividad económica privada, en la asignación de préstamos financieros; en la salud, etcétera). Por tanta violación a sus derechos.

Las elecciones de noviembre próximo no sólo no serán capaces de cerrar el déficit consensual que sufrimos y que nos impide resolver los problemas estructurales que nos han convertido en una de las sociedades más atrasadas del continente. Ellas podrían intensificar las divisiones políticas y sociales que ha sufrido Nicaragua en las últimas cuatro décadas. Tanto el partido gobernante como sus adversarios parecen empeñados en lograr esta miserable “hazaña”. (Andrés Pérez Baltodano en <<http://istmocentroamericano.blogspot.com/2011/03/c-on-f-i-d-e-n-c-i-l.html>>. Fecha de consulta: 17 de octubre 2011).

Sin pretender hacer analogía alguna con “Los indignados”, es muy probable, que la reacción social que se produzca en Nicaragua también sea por “acumulados”. La historia de Nicaragua es clara: cada reelección presidencial (doce casos antes de Ortega) ha traído consigo extraordinarios movimientos políticos y lamentablemente, mucha violencia y dolor a las familias nicaragüenses.

La irregularidad institucional que Ortega provoca con su ambición de reelegirse, carece de originalidad. Ha sido reiterada en la historia y dura los 190 años de la independencia formal, lo cual nos ha hecho un país de los más atrasados y pobres de todo el mundo.

Las reelecciones han producido conflictos políticos y bélicos con mortandades, pérdidas humanas valiosas, encarcelamientos masivos, crímenes selectivos, odios que dividen, pérdidas materiales, pérdidas de la soberanía nacional y exilios forzados, más exilios por [la] necesidad de trabajar. Para demostrar que nada de lo enumerado es ficción, desempolvemos nuestra historia, aunque sea a saltos de página. (Onofre Guevara López en <http://ambientalistas.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=250:lo-que-los-j%C3%B3venes-deber%C3%ADan-saber-sobre-reelecciones-en-nicaragua>. Fecha de consulta: 17 de octubre 2011).

Por otra parte, es un hecho que el producto que surja de las elecciones 2011 será muy vulnerable desde una óptica legal y sin duda, solamente la comprobación de un proceso limpio en su etapa final y de un respeto integral a la voluntad de la masa de votantes servirá, a pesar de todo, para concluir en la legitimidad de los resultados que reconozca oficialmente el Consejo Electoral.

Legalidad vs Legitimidad podrán estar frente a frente al concluir el proceso electoral en noviembre del 2011; o bien, podrán “aparearse” para disponer por fin de condiciones (correlación de fuerzas) que influyan favorablemente en el fortalecimiento de las instituciones y del estado de derecho. Los actores políticos más influyentes tendrán en sus manos el manejo de esos factores que

habrán de impactar (o no) en la estabilidad del país.

Si los actores políticos consideran que la legitimidad en sí misma es lo único que interesa, el país podría entrar en una dinámica mucho más fuerte de cambios determinados únicamente por la élite de poder gobernante. En este caso, la legitimidad podría ser interpretada como el aval de la sociedad a una administración pública que se ejercita por la vía de los hechos, y no por la vía del derecho (de la ley). En este escenario, el peso de la ley para poner orden no tendría preeminencia.

Le dije a Daniel que esta vez cueste lo que cueste el FSLN no debe permitir el retorno a la derecha en la toma del poder, al costo que sea necesario y aquí se puede permitir todo, menos el regreso de la derecha, sería como si nos diera un cáncer terminal, no se puede permitir el regreso del pasado. (Tomás Borge Martínez en <<http://archivo.elnuevodiario.com.ni/imprimir/2010-05-23/124865>>. Fecha de consulta: 22 de mayo 2010).

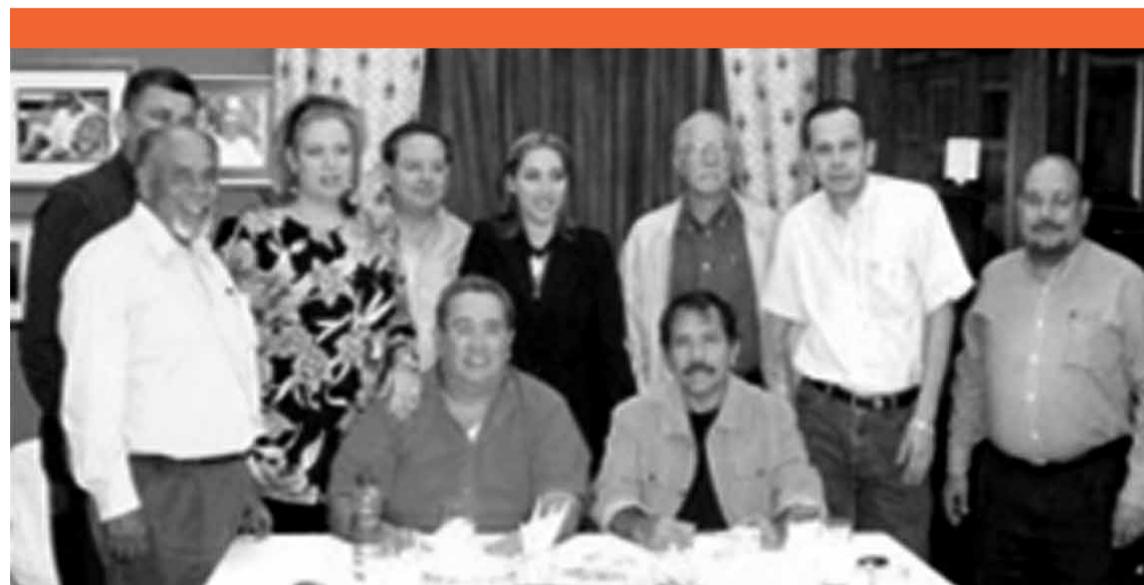
Legalidad y legitimidad podrían estar a la par, si los actores políticos, al interpretar responsablemente los resultados electorales concluyen que el mandato de la voluntad popular les exige cesar los abusos, detener las arbitrariedades en el ejercicio del poder e incrementar la fuerza de las instituciones y el marco jurídico. En este escenario, el “estado de derecho” saldría ganando. O sea, el orden se podría ir reconstruyendo por la vía de las leyes vigentes.

El peligro que implica la democracia electoral sin consenso social ha sido señalado por Hebert Adam, quien argumenta que la legalidad sin legitimidad puede usarse como un mecanismo para imponer un orden social no democrático. De acuerdo a Adam, la manipulación de la legalidad hace posible gobernar ilegítimamente con la ayuda de la ley. Los abusos legales del gobierno de Daniel Ortega constituyen un catálogo de ejemplos que validan el argumento de Adam.

La manipulación de la ley a la que invita la ilegitimidad, sin embargo, es un problema estructural que trasciende la gansteril actuación política de Ortega. En Nicaragua, la manipulación de la legalidad que hace posible gobernar ilegítimamente con la ayuda de la ley, se ha institucionalizado en la práctica rutinizada del pactismo. (Andrés Pérez Baltodano en <<http://www.confidencial.com.ni/articulo/265/el-reconocimiento-del-otro>>. Fecha de consulta: 17 de octubre 2011)

Sin embargo, el desencadenamiento de un proceso adverso a la legalidad parece estar en el horizonte. Por lo pronto, existen tendencias muy fuertes en el tejido del poder que aprecian la riqueza económica que les produce el mercado (alianza del gobierno con la empresa privada); prefieren el pacto político y corrupto con lo más recalcitrante de la derecha en el país; optan por la religión como ideología de un partido de izquierda (alianza del gobierno con figuras emblemáticas de la Iglesia Católica, principalmente por

la penalización del aborto terapéutico), en lugar de empeñar los esfuerzos y las capacidades en el fortalecimiento de un orden regulado por las leyes, en el que impere la igualdad de oportunidades y derechos, como principio básico. En este desorden creado en todos los campos de la vida nacional, en nombre de una revolución que continúa, son pocos quienes obtienen ventajas y muchas son sus ganancias (En río revuelto, ganancia de pescadores).



LAS ELECCIONES EN NICARAGUA

CARLOS FONSECA TERÁN⁴

Como antecedente inmediato del principal fenómeno político que se presenta en las elecciones presidenciales y legislativas de 2011 en Nicaragua, la crisis en el bloque oligárquico burgués en las más recientes elecciones presidenciales y legislativas se manifestó electoralmente con el enfrentamiento interno de la derecha entre los candidatos presidenciales Eduardo Montealegre y Eduardo Rizo; el primero en representación de la oligarquía conservadora, pero haciendo uso del ya típico mimetismo político de este sector bajo el manto de una ficticia alianza liberal debido a lo poco rentable que resulta desde los años setenta la marca política del conservatismo. El segundo (José Rizo), en representación de la burguesía liberal como candidato del Partido Liberal Constitucionalista, principal fuerza política organizada de la derecha en Nicaragua. En esa elección ganada por el FSLN con Daniel Ortega de candidato presidencial obteniendo el 38.07% de los votos válidos el segundo lugar con un 29% fue para Montealegre, el candidato oligárquico, exitoso banquero y fracasado político al perder luego en 2008 también como candidato a Alcalde de Managua por la derecha circunstancialmente unificada; responsable además de un sonado caso de corrupción mediante tráfico de influencias cuando fue Ministro de Hacienda bajo la administración Alemán, y escudándose siempre en la inmunidad proporcionada por los cargos públicos para evadir la justicia. El tercer lugar fue para el ambivalente candidato liberal Eduardo Rizo con el 26.21%, mientras el Movimiento Renovador Sandinista obtuvo el 6.5% en lo que fue el mejor resultado electoral en la historia de dicho partido, en alianza con otro sector disidente del sandinismo que llevaba como candidato al empresario Herty Lewites, quien falleció en plena campaña y fue reemplazado por el actual máximo dirigente renovador Edmundo Jarquín, de origen socialcristiano y en ese entonces funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo.

Actualmente, la ruptura del bloque oligárquico-burgués se manifiesta en la existencia de dos candidaturas de derecha disputándose el voto antisandinista: la pro-oligárquica (es decir, de lo que podría llamarse la aristocracia criolla) del empresario radial de origen conservador y ex vocero de la Contrarrevolución en los años ochenta, Fabio Gadea Mantilla (al inicio sin partido que lo postulara, como es ya costumbre para

⁴ Secretario Adjunto de Relaciones Internacionales del FSLN

este sector social, pero luego legalmente inscrito como candidato del minúsculo aunque con larga tradición política Partido Liberal Independiente), acompañado en su fórmula presidencial por el renovador Edmundo Jarquín; y por la otra parte la ya desgastada candidatura liberal de Arnoldo Alemán en representación de la burguesía plebeya, con el tradicional respaldo de ciertos segmentos de la población humilde que aún muestran cierta hostilidad contra el sandinismo.

Gracias a que la práctica demostró la falacia del discurso de la derecha que infundía el miedo al sandinismo entre los indecisos, y a las políticas sociales del sandinismo en esta su segunda etapa como fuerza gobernante, que han beneficiado a amplios sectores populares, el FSLN ha logrado romper lo que ya se había constituido como una barrera electoral del 40%, y en todas las encuestas aparece rebasando el 50% de la población votante. Tómese en cuenta que al momento de los resultados electorales este porcentaje aumenta, debido a que siempre la cantidad de votos válidos (referencia cuantitativa del porcentaje electoral) es menor que la cantidad de ciudadanos aptos para votar, debido a las abstenciones y los votos nulos. En segundo lugar aparece con diferentes porcentajes (entre el 17% y el 35%, según la encuestadora) Fabio Gadea; y en un tercer lugar distante de Gadea, pero también de los otros dos contendientes, Arnoldo Alemán con una oscilación entre el 10% y el 15%. Los otros dos candidatos (el ultraderechista Enrique Quiñónez y el moderado de derecha Róger Guevara) no rebasan el 1% cada uno.

La reducción de la pobreza, el respaldo gubernamental a la economía popular, el mayor acceso a la salud y la educación, la disminución de la mortalidad materna, la casi erradicación del analfabetismo, la atención y mejoría de las condiciones de vida para los sectores más empobrecidos del país, la sensibilidad social mostrada por el actual gobierno, el crecimiento económico, la estabilidad monetaria, la solución de la crisis energética, la preservación de la paz en el país, han sido factores que han permitido al FSLN llegar a ser seguro ganador de las elecciones presidenciales y legislativas en 2011. La expectativa actual no es quién ganará, sino con qué porcentaje ganará el FSLN, ya que su objetivo es obtener la mayoría parlamentaria suficiente para poder institucionalizar constitucionalmente la obligatoriedad de todo gobierno a cumplir las decisiones de los ciudadanos ejerciendo directamente el poder mediante un mecanismo organizativo conocido como los Gabinetes del Poder Ciudadano, mediante los cuales los ciudadanos, además de elegir a sus representantes y gobernantes con el voto en las urnas, decidan las políticas gubernamentales y controlen el desempeño de la gestión pública.

Debido a su segura derrota, la oposición está apostando a la desestabilización del proceso, para su deslegitimación, en aras de la cual está alegando fraude desde ahora, y por extraño que parezca, plantea abiertamente que la única manera de que no haya fraude es con su triunfo. La oposición ha llegado a tal extremo de debilidad que el candidato de Washington, Fabio Gadea Mantilla

ha prometido que de ganar las elecciones, mantendrá a Nicaragua dentro de la Alianza Bolivariana para los pueblos de América Latina y el Caribe (ALBA), la asociación económica y política más emblemática de los gobiernos más radicales de izquierda en el continente, a la cual Nicaragua ingresó en lo que fue la primera decisión de Estado tomada por el entonces nuevo Presidente en consulta con la multitud reunida en la Plaza de la Fe *Juan Pablo II* la propia noche de su toma de posesión.

Los ataques de la oposición al FSLN se reducen prácticamente a acusarlo de irrespetar el Estado de Derecho y de no compartir los principios básicos de la democracia representativa, de lo cual se desprende el señalamiento sobre la inconstitucionalidad de la candidatura presidencial de Daniel Ortega, quien aspira a la reelección con amplísimas posibilidades de triunfo, como se ha explicado ya. Las restricciones constitucionales a la reelección presidencial surgidas de lo que fue en la práctica un golpe de Estado institucional a mediados de los años noventa cuando aprovechando una circunstancia política del momento los partidos minoritarios de derecha hicieron mayoría en el Poder Legislativo y reformaron la Constitución y la Ley Electoral a la medida de sus intereses además de repartirse los cargos en el Consejo Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia (todo esto sin consulta con ningún sector de la sociedad nicaragüense, contrario a la manera en que se había hecho la Constitución en 1987), el FSLN recurrió recientemente de amparo ante la Corte Suprema de Justicia alegando desde el punto de vista técnico una contradicción, por su redacción y contenido, entre el artículo constitucional que establece el derecho a elegir y ser elegido, y el que establece la prohibición de ser candidato a un Presidente que haya ejercido dos veces o durante el período previo a la elección. La Corte respondió que en efecto, ambos artículos son incompatibles y al prevalecer por doctrina jurídica en tales casos el que establece el principio sobre el que pretende regularlo, declaró inaplicable el segundo, tomando en cuenta que no es de su competencia hacer reformas a la Constitución; las cuales se deberían desprender de lo dispuesto por el Poder Judicial, pero el hecho de que el FSLN no tenga mayoría en el Poder Legislativo ha impedido dicha reforma, para la cual se necesita incluso, mayoría calificada, lo cual sin embargo no inhibe jurídicamente al actual Presidente de competir como candidato, en vista de la inaplicabilidad legalmente declarada del artículo constitucional que se lo impedía.

Es curioso que en Costa Rica, para poder ser candidato a su más reciente período presidencial, Oscar Arias (tenido por la derecha nicaragüense como un gran demócrata) haya usado el mismo método por el que se cuestiona como ilegal y antidemocrática la candidatura de Daniel Ortega. Por otra parte, en las encuestas que se han hecho al respecto, en Nicaragua cerca de un 60% de la población está de acuerdo con la reelección presidencial ilimitada como un principio democrático que garantiza la absoluta libertad del pueblo como soberano, de elegir a quien considere el mejor, sin ningún impedimento legal. Otros datos curiosos son que en

la Nicaragua del somocismo casi siempre fue prohibida la reelección, lo que no impedía a la familia Somoza designar testaferros como gobernantes entre uno y otro de ellos; mientras en Europa (paradigma democrático de la derecha nicaragüense) la reelección presidencial no tiene restricción alguna.

Otro cuestionamiento recurrente de la oposición antisandinista (obviamente, vinculado con el tema político) es que a una buena parte de los actuales magistrados judiciales y electorales ya se les venció el período para el que fueron electos, pero el Presidente Daniel Ortega les prorrogó su mandato sin que ello sea facultad del Poder Ejecutivo. Cuando emitió tal resolución presidencial, el Presidente señaló que lo hacía basado en el vacío jurídico surgido ante la negativa de la Asamblea Nacional, a elegir nuevos magistrados, y en cumplimiento de su atribución constitucional de velar por la estabilidad de las instituciones públicas; ocasión en la cual planteó también que tal prórroga era válida hasta que el Poder Legislativo, que es a quien corresponde, eligiera a quienes sustituirían a dichos funcionarios, con lo cual se respetaba la competencia que en este sentido posee la Asamblea Nacional. El objetivo de la derecha con su mayoría parlamentaria impidiendo la elección de los nuevos magistrados era ejercer un chantaje político amenazando con el caos institucional al no haber magistrados electos, en caso de no aceptársele poseer mayoría en los poderes del Estado cuya conformación debía haber decidido la Asamblea Nacional.

Sin embargo, el cuestionamiento de la oposición a la legitimidad del Consejo Supremo Electoral se viene abajo desde el momento mismo en que inscribe sus candidaturas ante dicha institución y acepta competir bajo las reglas del juego establecidas. Otra importante incoherencia de la oposición antisandinista es su ya mencionada insistencia en que habrá fraude electoral e incluso, en que ya el fraude está garantizado por diferentes maniobras previas del Poder Electoral, con lo cual desestimula a sus potenciales votantes de participar.

Es interesante el hecho de que quienes protagonizaron el olvidado Pacto de 1995 (ilegítimo por la poca representatividad de sus participantes y la ausencia de toda consulta popular para hacerlo) en que se estableció la mayoría calificada como requisito para elegir magistrados en la Asamblea Nacional (esperando con ello ser tomados en cuenta al momento de las negociaciones para definir quiénes ocuparían los cargos correspondientes) ahora descalifiquen cada negociación que hacen el FSLN y el PLC para escoger a los magistrados, cuando ésta obedece a que, precisamente por el establecimiento del voto calificado como requisito para dicha elección, si ambos partidos no se ponen de acuerdo es imposible que algún candidato cuente con los votos suficientes, razón que obliga a las dos fuerzas mayoritarias a ponerse de acuerdo para tales efectos, pero ello no es producto de una decisión que tomaron dichas fuerzas, sino de una que tomaron en su momento esas fuerzas que hoy las cuestionan por hacer algo a lo cual están obligadas como producto de esa decisión.

Finalmente, debe decirse que en 2006 y el 2011 es cuando por primera vez en la historia de Nicaragua se enfrentan electoralmente las tres fuerzas políticas representativas de los tres sectores socioeconómicos fundamentales del país: la oligarquía conservadora (heredera de la dominación colonial anterior a la independencia en 1821, y cuyo modo de vida ha sido históricamente la actividad especulativa y rentista, además de la ganadería extensiva y por tanto el latifundismo), representada en la candidatura de Fabio Gadea Mantilla en la actualidad y de Eduardo Montealegre en 2006; la burguesía nacional representada históricamente por el liberalismo, cuya formación como clase social fue truncada por la intervención norteamericana de comienzos del siglo XX por la contradicción entre el desarrollo económico de Nicaragua promovido por la Revolución Liberal de entonces y los intereses de Estados Unidos como potencia económica naciente, siendo las actividades principales de este sector socioeconómico la agroexportación agrícola, la incipiente actividad industrial y el ejercicio de las profesiones llamadas liberales, cuyo candidato en la actual contienda es Arnoldo Alemán y en 2006 fue Eduardo Rizo, teniendo como principal fortaleza el respaldo del único partido de derecha con presencia de sus estructuras en todo el territorio nacional; y las clases populares (obreros, campesinos, pequeños propietarios, trabajadores por cuenta propia, profesionales asalariados) representadas por el FSLN con su candidato Daniel Ortega, cuya principal ventaja es la tradición revolucionaria que imprime una mística de lucha y trabajo a este partido como no la tiene ningún otro en Nicaragua, la fortaleza de sus estructuras cuya presencia en todo el territorio nacional se caracteriza por su actividad política permanente (a diferencia de la actividad exclusivamente electoral del PLC) y sobre todo, las políticas de gobierno que han beneficiado a amplios sectores empobrecidos de la sociedad nicaragüense y la ya explicada pérdida del miedo entre un importante segmento del electorado.

Un elemento importante a tener en cuenta es que la irrupción del sandinismo como la tercera fuerza política histórica en Nicaragua rompió el esquema tradicional de las llamadas paralelas históricas (liberales y conservadores) que hegemonizaban la vida política del país. Esta ruptura del esquema político anterior, que comenzó a darse con la articulación definitiva del movimiento revolucionario en Nicaragua a partir del movimiento encabezado por Augusto C. Sandino y luego rearticulado por Carlos Fonseca y el FSLN, obedeció a la necesidad histórica existente en un momento dado, en primer lugar, de que las clases populares en Nicaragua tuvieran una identidad política propia y un proyecto socioeconómico y político que fuera un reflejo de sus intereses y reivindicaciones, que por tal razón tienen su mayor garantía con el sandinismo gobernando el país; y en segundo lugar, de que este país contara con una corriente y una doctrina política representativa de su cultura y su realidad, ahora (y mientras esté el sandinismo gobernando Nicaragua) en permanente transformación revolucionaria.

EL ENGAÑOSO ENCANTO DE LAS EFECTACIONES NICARAGÜENSES

MÓNICA BALTODANO ⁵

Para facilitar la comprensión de la actual coyuntura electoral resulta útil recordar algunos de los antecedentes más importantes desde la derrota electoral del Sandinismo en 1990.

Las fuerzas de derecha, que llegaron al gobierno en ese año, emprendieron la restauración del viejo régimen capitalista, concentrador y excluyente, desmontando las transformaciones económico-sociales de la revolución y dando inicio a la contrarreforma neoliberal —entonces en eufórico ascenso.

Aunque inicialmente el pueblo sandinista organizado resistió con huelgas y luchas en las calles, la crisis de la dirección revolucionaria, y de los paradigmas, así como la falta de autonomía del movimiento social con respecto al FSLN permitió que Daniel Ortega —secretario general vitalicio del Frente— emergiera como el representante único y el negociador de todas las luchas, obteniendo de éstas obvias ventajas políticas personales y escasos beneficios para las masas.

Pese a que el primer Congreso del Frente y sus estatutos establecían la integración electiva y colectiva de sus autoridades; en un afán de poder y de control Ortega —que tan sólo era un miembro de la dirigencia histórica— aplastó todo cuestionamiento a su liderazgo, suprimiendo de facto la dirección colectiva y la institucionalidad democrática partidaria, convirtiéndose en pocos años en un caudillo al estilo de los que gobernaron el país hasta antes de la revolución. En poco tiempo, el FSLN fue privatizado por y para el caudillo.

Estas mutaciones al interior del FSLN tuvieron un sustento económico, material. La restauración neoliberal, que incluyó las privatizaciones de bienes y empresas del Estado y el retorno de tierras confiscadas por la reforma agraria sandinista, generó un nuevo proceso de acumulación de capital, que requería de la anuencia y tolerancia del Sandinismo, entonces en la oposición. Un sector de la cúpula del FSLN decidió formar parte integrante del nuevo “reparto”.

La rápida conversión de varios dirigentes revolucionarios en capitalistas, dio un nuevo e inédito sentido a la lucha por el poder: ampliar las ventajas y oportunidades para sus recientes negocios personales. La esencia de la estrategia de Daniel Ortega fue compartir el poder. Ello explica el pacto de alternabilidad y repartición de todos los órganos del Estado con el corrupto y enton-

⁵ Comandante guerrillera, actualmente diputada y dirigente del Movimiento Rescate del Sandinismo

ces presidente liberal Arnoldo Alemán. Componenda con la que ambos caudillos buscaban eternizarse como las representaciones exclusivas del Sandinismo y del liberalismo en el país, al estilo de las famosas “paralelas históricas” que dominaron Nicaragua casi todo el siglo pasado.

El orteguismo terminó como un aliado indispensable en la aplicación de las políticas neoliberales en Nicaragua y en la consolidación de la economía de mercado. Las huelgas y luchas de masas llegaron a su fin como fruto de esa política de alianzas, aprobando las privatizaciones, planes de ajustes y hasta el Tratado de Libre Comercio, tlc, con Estados Unidos, a principios de 2006.

Bajo esa lógica de búsqueda de poder por el poder mismo, Ortega también pactó con el principal jerarca católico en ese momento, el Cardenal Miguel Obando y Bravo, lo que explica —entre otros vergonzosos retrocesos— la posición medieval del FSLN como promotor de la penalización del aborto terapéutico, en plena campaña electoral, en el 2006. Desde entonces, el FSLN ha involucionado hasta llegar a ser un partido confesional, de tal manera que en todas sus actividades partidarias y estatales incluyen rigurosamente las invocaciones religiosas. La fuerza otrora revolucionaria sandinista selló su mutación en fuerza orteguista.

LOS RASGOS ESENCIALES DEL ORTEGUISMO EN EL PODER

Desde un inicio, la actual gestión de Ortega se ha caracterizado por mantener —según las circunstancias— una retórica antiimperialista; y aunque proclama este período como la segunda etapa de la revolución: cristiana, socialista y solidaria, en realidad afianza tanto a la economía de mercado como a los nuevos y viejos grupos oligárquicos.

Usando el control absoluto del Estado, Ortega ha terminado de entregar las mejores riquezas del país a las grandes corporaciones transnacionales. La esencia neoliberal de su gestión explica el respaldo de la cúpula empresarial del Consejo de la empresa privada (cosep), el aval y aplausos del FMI a través de programas y flujos de cooperación. Todo ello, con la complacencia del gobierno norteamericano, que hasta ahora privilegia los hechos —economía de libre mercado con ritual electoral— por sobre la retórica orteguista.

Como dijera apenas hoy el principal asesor económico del presidente Ortega “[...] pese a la retórica política, el manejo de la administración de la economía ha sido mucho más práctica y muchísimo menos ideológica que en el pasado, porque la economía en el gobierno de Ortega está más abierta que las economías de libre mercado de los tres gobiernos anteriores [...]”

En Nicaragua, los elementos más destacados del gran empresariado nicaragüense comparten plenamente todas las grandes decisiones del gobierno. Incluso éstas se aprueban de común y previo acuerdo debido a que común y compartidos son los intereses de la burguesía nicaragüense con el empresarial estamento superior del orteguismo. Inclusive algunos elementos de la cúpula más amplia del orteguismo se han convertido en estos años en los principales operadores políticos de capitalistas locales, de inversionistas extranjeros, de las ideas y tesis de las instituciones económicas internacionales: FMI, BM, BID, entre otras.

Desde el principio de su mandato, Ortega ha pagado cumplidamente a los banqueros —con fondos del presupuesto nacional— una deuda fraudulenta e ilegal producto de quiebras bancarias y ha accedido a no modificar la política fiscal de los anteriores gobiernos neoliberales, favoreciendo así a grandes capitales, especialmente a los bancos privados e inversionistas extranjeros, que obtienen exorbitantes ganancias sin gravamen⁶. El gobierno orteguista se distingue en América Latina porque se ha negado a modificar la política fiscal impuesta por los anteriores dieciséis años de gobiernos de derecha.

6 Foto: Portada de revista oficial del FSLN Visión Sandinista. La pareja presidencial con el cardenal Obando, el presidente del cosep y el principal capitalista nicaragüense, Carlos Pellas. Lema: Con la alianza gobierno, empresarios, trabajadores, más crecimiento económico .

Los cuantiosos y generosos recursos de la ayuda venezolana, que suman la misma cantidad que toda la cooperación externa junta, han sido manejados por la familia gobernante de forma totalmente privada, sin ningún control del Estado y menos del partido que actualmente sólo existe como casilla electoral. Mientras proliferan las denuncias por corrupción, los programas de ayuda a los más pobres sirven de colchón amortiguador.

Con esos fondos, fuera del presupuesto y de todo control, la pareja presidencial ha empujado sus principales programas sociales, "Hambre Cero", "Usura Cero", un bono para trabajadores del Estado de menores ingresos e iniciativas para viviendas populares, todo bajo el sello clientelar y electorero. No se puede ignorar que los diversos programas asistenciales del gobierno contribuyen a resolver en cierta medida las más urgentes necesidades de los extremadamente pobres de nuestro país. Además, hay que reconocer a su favor que la inserción de Nicaragua en el ALBA es una acción positiva en la búsqueda latinoamericana de relaciones solidarias y de comercio justo, pero resulta ridículo y hasta un insulto, pretender que en Nicaragua se esté construyendo una revolución socialista.

Los programas asistencialistas, que hoy han ampliado la base electoral, constituyen un poderoso velo fetichista que oculta la hegemonía del capital y su economía de mercado en Nicaragua. El control foráneo de la riqueza nacional extranjeriza nuestra economía con la correspondiente pérdida de soberanía, y la subordinación a los programas del FMI y BM arroja los consabidos resultados macroeconómicos que atan nuestro país al capital. Las estadísticas oficiales subrayan el crecimiento en todos los rubros, pero seguimos siendo el segundo país más pobre de América Latina.

Para una parte de la sociedad resultan visibles los pasos que da Ortega hacia un régimen absolutista mediante el control y mando de todos los poderes del Estado, gobiernos municipales y regionales; así como el control de manera privada de medios de comunicación: comprando canales de televisión o instalando nuevos, poseyendo las radio-emisoras y avanzando sobre los medios escritos. Una lógica de concentración familiar de poder político y económico que se acompaña de un modelo ideológico medieval, donde se mezclan las ideas mágicas, la manipulación de la religiosidad popular y un obscuro culto a la personalidad.

El control de todos los aparatos del Estado se ha realizado atropellando la legalidad y violando descaradamente la Constitución. Entre los casos más dramáticos se encuentra el robo de las elecciones municipales, en 2008; la promulgación de decretos inconstitucionales para prolongar el periodo de los magistrados en los demás poderes del Estado; y la imposición de su candidatura para los comicios 2011, pasando por encima de la Constitución que prohíbe expresamente (Art.147 CN) la reelección continua y para quien hubiese gobernado por dos periodos. Ambas prohibiciones excluyen expresamente a Ortega por lo que su candidatura es un atropello flagrante a la ley suprema del país.

LAS ELECCIONES 2011

De principio a fin todo el proceso está viciado de ilegalidades y actos arbitrarios que constituyen un atropello a los derechos políticos más elementales. De igual manera que la candidatura ilegal e ilegítima de Daniel Ortega, el aparato que organiza el proceso es ilegal y fraudulento. Además de corrupto, Roberto Rivas el presidente de facto del Consejo Supremo Electoral está comprado por el partido de gobierno. Los partidos "opositores" decidieron participar en esta farsa electoral, legitimando a Ortega de hecho, y sin exigir oportunamente las condiciones necesarias que garanticen transparencia, se conforman con obtener algunos curules; todo el aparato electoral encargado de contar los votos y de anunciar los resultados, como todo mundo sabe, está controlado por el orteguismo y sus socios de derecha; el padrón electoral está inflado y la cedula electoral partidizada.

Las fuerzas participantes en los comicios 2011 son las siguientes:

El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) con Arnoldo Alemán como candidato. Alemán fue acusado, procesado y condenado a veinte años de cárcel por robo de más de cien millones de dólares del erario público. Pero fue liberado de todos los cargos por un fallo arbitrario de la Corte Suprema de Justicia dictado en un momento en que Ortega negoció con aquél el control de la Junta directiva del parlamento en enero de 2008. En estos cinco años, el PLC ha mantenido en lo esencial su política de reparto con el orteguismo.

Alianza Liberal Nicaragüense con Enrique Quiñonez como candidato. Al iniciarse el año 2008, el CSE despojó interesadamente al banquero Eduardo Montealegre de la dirección de la ALN, entregándosela en pago a un grupo de liberales que desde entonces votaron con la bancada oficial en el parlamento. El efecto más importante del traspaso de ALN a estos "socios" del orteguismo es que según ordena la ley electoral ahora todas las instancias electorales: departamentales, municipales y las mesas electorales tendrán como presidente y vicepresidente a un militante del FSLN o a uno de ALN, partido controlado actualmente por el FSLN. Es decir que dos de tres miembros de la mesa son de inmediato controlados por el orteguismo.

El Partido Liberal independiente (PLI) con Fabio Gadea como candidato. Gadea es actualmente diputado del PLC en el Parlamento Centroamericano y consuegro de Arnoldo Alemán. Bajo el PLI se cobijan distintos grupos de liberales descontentos, especialmente las fuerzas del banquero Eduardo Montealegre, quien compitió en las elecciones 2006 en la casilla electoral de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) obteniendo el segundo lugar en esos comicios. Por una parte, el sector de Montealegre comparte y respalda plenamente las políticas económicas neoliberales que el gobierno de Ortega promueve, mientras que sus dissentimientos políticos

se frenan y son reducidos cada vez que el gobierno los amenaza con proceder contra sus líderes, como ejemplo tenemos el juicio por el caso Cenis⁷.

También se cobijó en el alero del PLI, el partido Movimiento Renovador Sandinista (MRS) con Edmundo Jarquín como candidato a la vicepresidencia. El MRS fue despojado ilegal y arbitrariamente de su personería jurídica a principios del 2008, para impedirle participar en las municipales y desde entonces ha mantenido una alianza con Montealegre, que los llevó a pedir el voto para el PLC en las elecciones municipales 2008.

El Frente Sandinista de Liberación Nacional con Daniel Ortega nuevamente como candidato. Usando todas las herramientas de la política como instrumentos de corrupción, ha comprado conciencias y ahora hasta los funcionarios nombrados por el PLC —en el reparto de cuotas que el pacto protagonizó en los distintos poderes del Estado— están de facto subordinados al presidente. Esto se observa más claramente en el CSE (Consejo Supremo Electoral), donde todos los funcionarios responden al orteguismo por lo que Ortega los mantiene en sus puestos (grandes salarios y privilegios) gracias a un inconstitucional e ilegal decreto ejecutivo. Estos funcionarios corruptos serán los encargados de dirigir todo el proceso electoral del 2011 fingiendo que tienen alguna legitimidad para ello.

Según las encuestas, Ortega no tendrá problemas para superar el 38% de votación que obtuvo en el 2006, pero su meta es obtener la mayoría absoluta en el parlamento —cuestión difícil por la vía de los votos. Con todo el aparato electoral controlado por el orteguismo, las preguntas son las siguientes: ¿Ortega repetirá las acciones fraudulentas de elecciones pasadas? ¿Será la oposición capaz de mantener la lucha en las calles para rechazar ese eventual fraude?

LA IZQUIERDA SANDINISTA NO ORTEGUISTA, PROSCRIPTA

Desde que el orteguismo tuvo posibilidad de influir en el Consejo Supremo Electoral, y ahora que tiene el control total sobre éste, ha maniobrado para impedir la conformación de nuevas fuerzas electorales que tengan sello sandinista o de izquierda.

Su táctica es tanto clara como descarnada: por un lado desarrollan su estrategia de pactos con sectores de la derecha liberal, conservadores, ex guardias nacionales, somocistas, ex contras, demócratas cristianos y sectores religiosos reaccionarios; por otro lado, por la vía de las prebendas, sobornos y chantajes, animan y estimulan la creación de opciones tradicionales y de derecha para mantenerlos fragmentados y divididos. Al mismo tiempo impiden a cualquier precio el surgimiento de fuerzas progresistas, de origen sandinista y su legalización como partido político.

El propósito está claro: eliminar todo tipo de competencia progresista y conservar por la fuerza, el monopolio de la “representación” de posiciones de izquierda, manteniendo una retórica radical, populista, que no tiene nada que ver con las políticas neoliberales y de alianza con el gran capital que realmente desarrollan.

El orteguismo busca que la izquierda se pliegue, se desdibuje dentro de casillas lideradas y representadas por personeros de la derecha, posponiendo con ello la construcción de fuerzas propias. Eso fue lo que ocurrió para esta contienda, y por ello un sector importante de los electores no tenemos nuestra propia opción en una democracia restringida, donde en la práctica no hay pluralismo porque la izquierda sandinista está proscripta.

En la contienda electoral 2006, la alianza sandinista crítica del orteguismo integrada por el Rescate del Sandinismo, MRS (Renovadores) y otras pequeñas fuerzas, obtuvimos juntos más del 8.5% de votos para los diputados. Este respaldo representaba una oportunidad para seguir apostando a la construcción de una alternativa sandinista y progresista, por eso mismo el orteguismo despojó ilegalmente de su personería jurídica al MRS.

7 La deuda interna que agobia a Nicaragua se constituye en buena parte por la deuda gubernamental con tres bancos privados que compraron Certificados Negociables de Inversión (Cenis) emitidos por el Estado para cubrir la quiebra de cinco bancos privados durante el gobierno de Arnoldo Alemán. Los Cenis se negociaron a intereses altísimos, hasta del 21%. En el gobierno de Enrique Bolaños se realizó una renegociación que favoreció a Bancentro. Se acusa a Montealegre de haberse beneficiado como socio de ese banco, mientras era Ministro de Hacienda de Bolaños.

RESULTADOS ELECTORALES 2006

FUERZAS	PORCENTAJE DE VOTACIÓN PARA PRESIDENTE	VOTACIÓN PARA DIPUTADOS		NÚMERO DE ESCAÑOS PARLAMENTO
FSLN	38.08%	899.292	37.18%	38
PLC	26.21%	664.024	27.45%	25
ALN (Montealegre)	29%	635.679	26.28%	22
RESCATE y MRS	6.44%	205.340	8.49%	5

Frente al despojo de la personería jurídica y en lugar de empecinarse tenazmente en apostar y crecer como coalición de fuerzas de izquierda enfrentando los obstáculos orteguistas, el partido MRS —pretextando realismo pragmático— optó por una línea de entendimiento con el banquero Eduardo Montealegre y otros sectores de la derecha, de tal manera que en las elecciones 2008 llamaron a votar en la casilla de Alemán (PLC) y ahora, como hemos dicho, se unieron a Montealegre para respaldar a un candidato, el cual además de no ser ninguna garantía de ruptura con el esquema del pacto es un envejecido político conservador. El argumento de fondo de estas fuerzas es que hay que votar contra Ortega para impedir una dictadura, aliarse con “el mal menor” y ganar algunos escaños en el parlamento a toda costa.

En el Rescate del Sandinismo nos hemos distanciado de esta posición negándonos a respaldar las fuerzas políticas participantes ya que ninguna corresponde con nuestras preferencias políticas: “Ir a votar por una propuesta que no compartimos, sólo porque ‘no hay de otra’ o porque es ‘el mal menor’, es una violencia contra nuestra propia libertad” —dijimos en un comunicado público. En el Rescate hemos llamado a denunciar el proceso electoral como una farsa y a ejercer el voto protesta:

“Teniendo certeza de la ilegalidad de estas elecciones, he decidido ejercer mi derecho al VOTO PROTESTA en señal de arrechura pegando esta calcomanía en la boleta y en todos los lugares que me dé la gana para comunicarles que mientras existan candidatos y magistrados ilegales y corruptos; no exista pluralismo político y se excluyan alternativas de izquierda; y todo esté amarrado para un fraude ¡No cuenten conmigo para esta FARSA!”

Esta posición corresponde a la naturaleza de la acción política de El Rescate, organización de izquierda y sandinista, que redime el programa histórico del FSLN de Carlos Fonseca, se opone rotundamente a la privatización del Sandinismo y denuncia al esperpento orteguista como diametralmente opuesto al pensamiento revolucionario sandinista de Carlos Fonseca.

En nuestro posicionamiento público reafirmamos lo que desde la fundación de El Rescate hemos dicho: “Seguiremos trabajando y apostando al mediano y largo plazo en el proceso de la necesaria utopía nicaragüense. Creemos que las banderas de los luchadores que nos antecedieron deben ser levantadas por nuevas generaciones de patriotas. Sobre todo seguiremos insistiendo en que el futuro del pueblo nicaragüense no se reduce a pequeñas dadas, piñatas y regalías que ofrecen ahora con el dinero ajeno”

Tenemos la convicción de que la superación del actual esquema de poder político, basado en un sistema económico que enriquece a unos cuantos y mantiene en la pobreza a la mayoría, no será superado respaldando a grupos y figuras que en el pasado antiguo y reciente han usado el poder para su propio beneficio. Tampoco podemos mentirle a la gente diciéndole que la única manera de cambiar las cosas es por medio de los votos que vayan a depositar el 6 de noviembre próximo y por las opciones restringidas que se ofrecen. Creemos en la lucha tenaz y persistente junto al pueblo por sus derechos económicos, sociales y por la democracia; apostamos a la movilización ciudadana y la conquista de las calles para esas luchas.

No ignoramos que urge despertar la conciencia ciudadana para enfrentar al poder y al gobierno ilegítimo que resultará de un proceso igualmente viciado, pero tendremos más autoridad frente al pueblo, gracias a que hoy impugnamos claramente este circo electoral.

Asimismo, estamos convencidos de que el debilitamiento del poder absoluto de Ortega vuelve necesario trabajar y hacer conciencia en las bases del FSLN, sobre todo en los que honradamente sudan las camisetas tratando de mejorar Nicaragua desde su comunidad y sus organizaciones, para que se den cuenta de que su labor es abusivamente usufructuada por un caudillo que hace tiempo ya no los representa.

En síntesis, frente a la candidatura ilegal de Ortega, para estas elecciones del 6 de noviembre próximo, el pueblo tiene como

únicas alternativas ciertas variantes de la envejecida y retrograda derecha nicaragüense. No habrá opciones de izquierda. Ortega no las permite. Así las cosas, las perspectivas para Nicaragua no son muy alentadoras. Serán necesarias nuevas resistencias y luchas para tratar de reabrir nuevos caminos que superen el sometimiento de la sociedad, la economía y la política al mercado y a los caudillos. Habrá elecciones; pero, por ahora perderá la democracia, sin duda.

La Rosa Luxemburg Stiftung se deslinda de cualquier responsabilidad derivada de las opiniones vertidas en esta publicación que reflejan única y exclusivamente el punto de vista de sus autores.